

Datos contra la delincuencia



La Sociedad Agrícola de Biobío lanzó el Observatorio de Delitos Rurales con soporte técnico de la consultora Leadetik. La iniciativa busca georreferenciar puntos críticos de robo en las comunas con mayor prevalencia, detectar cadenas de reducción de especies y reventa de agroquímicos, y generar evidencia que permita diseñar políticas públicas para un combate eficaz contra la delincuencia.

Los tres principales delitos detectados son abigeato, hurto de insumos agroquímicos y robo de cobre. La sustracción de cables del tendido eléctrico, maquinarias, equipos y asaltos a domicilios completan el panorama delictual. A esto se suman atentados incendiarios contra cosechas agrícolas y forestales.

Socabio reconoce que los agricultores afectados fallan al no denunciar, lo que agrava la "cifra negra" de delitos no registrados. El observatorio apunta justamente a resolver esta brecha mediante una red de agricultores comprometidos con el levantamiento de información, lo que será clave para hacer un seguimiento efectivo en Fiscalía y tribunales.

El hecho de que uno de los principales gremios de la región decida financiar su propio sistema de monitoreo delictual refleja una necesidad insatisfecha en materia de seguridad rural. El mundo rural ha estado en una posición secundaria dentro de las prioridades de seguridad pública, situación que puede explicarse por la dispersión geográfica de estos delitos y la menor densidad poblacional de las zonas afectadas, pero que no por ello resulta menos urgente de atender.

Socabio señala que pese a las conversaciones con las autoridades de Gobierno, Carabineros y la Policía de Investigaciones, los delitos continúan ocurriendo. Han existido mesas de trabajo y reuniones, pero estas instancias aún no han logrado traducirse en una reducción del abigeato ni en la desarticulación de las cadenas de reducción de agroquímicos robados.

La implementación del observatorio será en dos etapas. La primera se centrará en levantar información sobre la realidad delictual y los delitos de mayor impacto. La segunda, que inicia en marzo, entregará mensualmente análisis con datos levantados, visitas a terreno y exposiciones sobre seguridad. Esta segunda etapa coincidirá con el inicio del gobierno de José Antonio Kast, quien comprometió la seguridad como prioridad de su administración.

El gremio señala que el nuevo gobierno ganó la elección con ese argumento, por lo que espera que la seguridad no sea solo un tema urbano. El desafío para la próxima administración será transformar este observatorio privado en un insumo efectivo para acciones coordinadas entre el sector público y privado.

El observatorio representa una iniciativa que puede convertirse en modelo de colaboración público-privada para abordar la delincuencia rural. La información que genere debería servir como base para que el Estado diseñe estrategias específicas para el sector rural, que protejan los recursos invertidos y disminuyan la incertidumbre en las zonas agrícolas.